

Señor presidente:

Para tener una democracia sólida, es esencial que se respeten y garanticen **plenamente** los derechos humanos.

Para esto, deben sancionarse a los responsables que, por su acción o por su omisión, hayan incidido en dichas vulneraciones.

En nuestra labor como Senadores nos toca resolver como jurados la acusación constitucional para determinar si el acusado es culpable o no de la infracción que se le imputa, la que proviene de la finalidad política que tiene dicha institución. La acusación tiene por objeto el control político sobre las funciones de las autoridades. Es así como con esta acusación se pretende demostrar la responsabilidad política del ex Ministro Andrés Chadwick por las graves violaciones a los derechos humanos sucedidas en nuestro país entre el 18 de octubre y el 28 de octubre recién pasados, tiempo en que fue Ministro del Interior, debido a que habría incumplido sus

deberes constitucionales y legales para proteger la vida y la integridad física de las chilenas y chilenos.

La causal para acusar a un Ministro de Estado se señala, en el artículo 52, numeral 2, letra b) de la Constitución, es decir, por haber comprometido gravemente el honor o la seguridad de la nación, o por infringir abiertamente la Constitución o las leyes o por haberlas dejado sin ejecución.

Efectivamente, desde el 18 de octubre, fecha en que “Chile despertó”, iniciando el llamado “estallido social”, nuestro Estado de derecho quedo en vilo. En Chile, como una forma de controlar el descontento social, **el Gobierno y el Ministerio del Interior** planteó una disyuntiva entre el orden público y los derechos humanos, en que, para conseguir este primer fin, se pisotearon reiteradamente los derechos más esenciales.

Para **fundamentar mi voto del capítulo I, señalaré los deberes y atribuciones constitucionales y legales que tiene el Ministro del Interior, sobre todo, en relación a las**

Fuerzas de Orden y Seguridad. Continuaré exponiendo los antecedentes que existen de violaciones a los derechos humanos durante su gestión por parte de Carabineros. Por último, concluiré si el acusado ejerció la facultad legal y constitucional o no, de controlar a Carabineros para evitar dichas vulneraciones.

La ley 20.502 es la norma que regula las facultades del Ministro del Interior, siendo su principal función velar por el orden público, concentrándose en dicha autoridad la decisión política al respecto. Su artículo 2° señala que las fuerzas de orden y de seguridad dependerán de él, de lo cual se deduce que las acciones que tome Carabineros son decisiones del Ministro al ser el superior del general Director de Carabineros, siendo el uso de la fuerza de esta policía supeditada al requerimiento político del Ministro. De acuerdo a esto, existe una relación de jerarquía, debiendo el Ministro controlar la labor de ésta policía.

Pero la atribución de velar por el orden público tiene como límite constitucional el artículo 5° de la Carta Fundamental, la cual señala que es deber de todo órgano respetar y promover los derechos humanos, tanto los que están en la Constitución como en los tratados internacionales. Entonces, el control político que debe ejercer el Ministro sobre Carabineros, de acuerdo a esto, es para que las fuerzas de orden y seguridad actúen con respeto a los derechos constitucionales, lo que es válido aún en un Estado de Excepción.

Señor Presidente, es un dolor admitir que en nuestro país se han violado los derechos humanos, especialmente, la vida y la integridad física y psicológica de la población, derechos que son reconocidos por diversos tratados internacionales ratificados por nuestro Estado. La Declaración Universal de Derechos Humanos, que ayer cumplió 71 años, señala que nadie estará sometido a tortura ni penas o tratos crueles. La Convención Americana de DDHH declara que el respeto al

derecho a la integridad personal incluye el derecho a no sufrir torturas ni tratos vejatorios.

Estos mismos principios son consagrados en nuestra Constitución, en que el artículo 19 N° 1 reconoce el derecho a la vida y la integridad física y psíquica de los ciudadanos.

Es este el marco jurídico y político en el cual se debe desenvolver el Ministro del Interior.

Ahora, ¿Cómo hemos llegado a la convicción de que existieron violaciones a dichas garantías cuando fue Ministro del Interior Andrés Chadwick? Existen fundamentos en informes y declaraciones de organismos internacionales. Por ejemplo, el 8 de noviembre, el Comité de expertos de Naciones Unidas, señaló que de acuerdo al elevado número de heridos y la manera que las armas no letales fueron utilizadas, parece indicar que el uso de la fuerza fue excesivo, violando los requisitos de necesidad y proporcionalidad, siendo deber del

Estado proteger a la población de los actos de violencia. **Este viernes sabremos la versión final de este informe.**

Asimismo, la Comisión Interamericana, a través de su secretario ejecutivo, Paulo Abrao, señaló que en Chile: "hay violaciones a los derechos humanos (...) Hay denuncias y testimonios muy claros en ese sentido".

En esta misma línea, Human Right Watch reveló el 26 de noviembre su informe, en que relata graves casos, dando cuenta de vulneraciones por parte de Carabineros, que incluyen abusos graves en las detenciones. Hechos que sucedieron, también, cuando Andrés Chadwick era Ministro.

En la etapa que estuvo Chadwick a cargo del Ministerio del Interior hasta el 28 de octubre, el INDH informó en su oportunidad que se presentaron 12 amparos, 5 querellas por homicidios, 18 querellas por violencia sexual, 76 querellas por torturas, con un total de 3.535 de detenidos. Este es un dato no menor, hasta hoy, la gran mayoría de las querellas

presentadas por homicidios **fueron durante la gestión del acusado.**

En particular, en ese periodo existieron 127 personas con traumas oculares producto de disparos con perdigones. **Esto fue expuesto en la Comisión de Derechos Humanos del Senado a la semana siguiente del inicio de las movilizaciones, cuando el acusado aún era ministro. Pese a esto, no existió un cambio en la actitud del ex Ministro. Esto llevó a que, en los días posteriores de haber dejado el cargo,** la sociedad oftalmológica afirmara estar frente a una de las peores crisis sanitarias del mundo.

Estos casos de traumas oculares fueron por la utilización de armas antimotines, no letales, las cuales eran disparadas como métodos disuasivos contra manifestantes. Pero las mismas eran percutidas directamente a los cuerpos o rostros de éstos, sin cumplir protocolo alguno.

Debemos recordar que El Ex Ministro dictó el decreto 1364, el 13 de noviembre de 2018, del cual emana la orden general 2635 de Carabineros, que aprueba el protocolo de Carabineros para el orden público, señalando que las escopetas antidisturbios se podrán utilizar cumpliendo los principios de necesidad, legalidad, proporcionalidad y progresividad, frente a una agresión activa o potencialmente letal, es decir, deben ser la respuesta frente a una agresión. Pero esto no sucedió. Carabineros utilizó de forma indiscriminada los perdigones, disparando directamente la misma, sin mediar agresión alguna, **NO EXISTIENDO DE PARTE DEL EX MINISTRO CHADWICK ACCIÓN AL RESPECTO PARA FISCALIZAR SU CUMPLIMIENTO.** A esto se agrega que entre el 18 y 23 de octubre ocurrieron 29 casos de traumas oculares, pero en los cinco días posteriores, se dieron más de 70 casos, lo cual es un aumento exponencial en un breve plazo, lo cual se dio en la gestión de Chadwick.

También, la violencia sexual se tomó el accionar de Carabineros, donde existen diversas denuncias de obligar a mujeres, hasta niños, a desnudarse para que posteriormente realizaran sentadillas en cuclillas. Según el informe de Abofem (Asociación de Abogadas feministas), en las Comisarías se golpeó y se humilló a mujeres.

También los niños y niñas de nuestro país sufrieron de violencia por parte de Carabineros. Al 26 de octubre la Defensoría de la Niñez, que tuvo una gran labor, hablo de 6 niños heridos por balas, 18 por maltratos, 19 por perdigones. Así, es como declaró, junto a UNICEF, que no es tolerable que en un estado democrático se sigan vulnerando los derechos humanos.

Pero ¿Qué responsabilidad tiene el Ministro Chadwick en esto? Su defensa ha tratado de demostrar que no puede responder el Ministro por actos de terceros. Pero lo que se le imputan son hechos personales, son omisiones, es su

negligencia en el ejercicio de sus atribuciones, al no cumplir con sus deberes constitucionales y legales. Estos eran hechos públicos y notorios, y de las que el Ministro del Interior estaba en conocimiento.

La negligencia se demuestra en sus declaraciones del 21 de octubre, en que el Presidente afirmó estar en guerra contra los manifestantes, polarizando al país. En ese entonces, el ex Ministro declaró: “(el Pdte) ha señalado una expresión que **demuestra la autoridad y decisión con la que nosotros, como Gobierno, queremos combatir ese vandalismo** y darle seguridad a la ciudadanía”, en que: “hemos adoptado distintas medidas para efecto de lograr una acción más decidida en contra de esta violencia”. De acuerdo a esto, el ex Ministro consiente en acciones más represivas contra la población, de forma dolosa. Declaró respaldar, “**con total decisión a nuestra Fuerzas Armadas y Carabineros, porque están cumpliendo un deber en resguardo de**

todos los ciudadanos del país”, siendo que ya a esa fecha existían graves denuncias contra Carabineros.

El ex Ministro estaba en conocimiento de estos hechos. El 22 de octubre sostuvo una reunión con el director del INDH en que Micco señaló: “Le manifestamos al ministro Chadwick nuestra preocupación por la violación de los derechos fundamentales que hemos observado.”. Pero ¿cual fue su reacción? Solo sumarios, que son solo medidas administrativas. Ninguna acción realizó para salvaguardar la integridad de la población. No condenó el actuar de Carabineros.

Lo contrario pasó con su sucesor, el Ministro Blumel, que envió diversos oficios a las policías para reafirmar los principios que aborda el protocolo de uso de la fuerza.

Es por esto que su actuar, infringe su deber legal de mantener el orden público de forma racional y responsable, lo

cual significó violaciones graves a los derechos humanos, incumpliendo el deber de respetarlos,

El acusado no realizó acción para detener estas vulneraciones, teniendo las facultades y el deber legal de controlar el actuar de Carabineros, lo cual está plenamente acreditado en este proceso. **¿Por qué no actuó más enérgicamente frente a lo que sucedía en su país?**

El capítulo II se basa en una infracción grave de la Constitución al participar en la declaración del Estado de emergencia y, con esto, afectar diversos derechos constitucionales.

Desde la declaración de estado de emergencia el 19 de octubre, hasta su término, sucedieron más de 3193 caso de personas privadas de libertad. En ese intertanto, se cometieron graves afectaciones a los derechos constitucionales

En el Estado de Emergencia se provocaron graves vulneraciones al debido proceso. Uno de estos es el derecho a defensa, en que se negó el registro público de detenidos a los abogados, con esto se obstaculizó el derecho de defensa de los detenidos, lo cual fue expuesto ante la CIDH en Quito por parte del Colegio de Abogados.

Al declararse el Estado de Emergencia, las zonas bajo éste Estado de excepción, quedan bajo la dependencia del jefe de la defensa nacional, pudiendo restringir solo el derecho de reunión y el de locomoción, ningún otro.

En este estado de emergencia, ni las atribuciones constitucionales ni las legales de las autoridades se suspenden. Asimismo, con mayor razón, mantienen la obligación de respetar y promover los derechos humanos. Esto lo señala el art. 44, al afirmar que no pueden verse afectadas las competencias ni el funcionamiento de los órganos. Por lo cual, el Ministro del Interior mantuvo la responsabilidad política

del orden público, debiendo ejercer, en ese momento, el control jerárquico sobre Carabineros que le obliga la legislación.

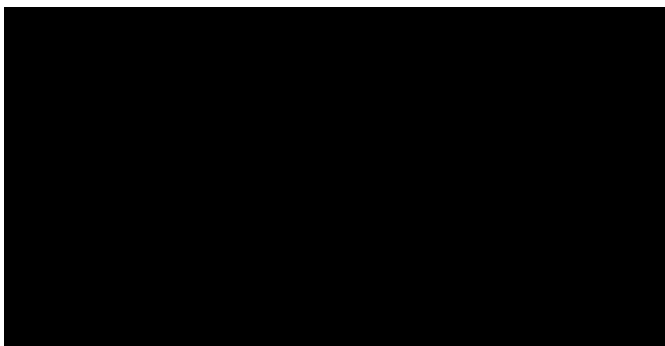
Señor Presidente, en Chile, los últimos meses se registraron violaciones generalizadas a los derechos humanos, dada la repetición de vulneraciones a la vida e integridad física y psíquica de compatriotas, realizados principalmente por Carabineros de Chile, lo cual está acreditado con informes y diversos testimonios recogidos, en que pese a que aún no existen condenas dada el breve plazo que ha transcurrido, en que he tomado la convicción de su existencia. También, quedó acreditado en este proceso que el ex Ministro, pese a estar en conocimiento de estos hechos, no cumplió con sus deberes constitucionales de controlar el respeto a los derechos humanos. **Quiero terminar por señalar que se necesita una reforma profunda a Carabineros, para que la ciudadanía recupera la confianza a la institución y que estos hechos**

no se vuelvan a repetir, y que no volvamos a escuchar a un General Director ofrezca impunidad a sus subalternos por las infracciones cometidas.

La acusación no es una acción personal contra Andres Chadwick, como se ha tratado de deslizar aquí. No está en entredicho su trayectoria, sino que se trata de hacer cumplir la Constitución y las leyes, tal como señala el juramento de un Ministro, cuestión que el acusado no cumplió.

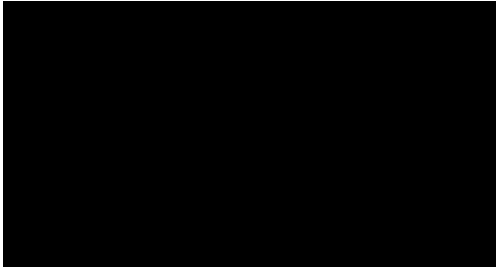
Nadie defiende a quienes cometieron delitos y graves hechos de violencia que condenamos enérgicamente. De lo aquí se trata es de que existiendo pruebas claras de graves violaciones a los derechos humanos por parte de agentes del estado, quien tuvo la responsabilidad política de frenarlos o evitarlos, no lo hizo.

He dicho



INTERVENCION

PROCESO CONSTITUYENTE



Señor Presidente:

La presente, es la discusión más relevante en nuestra historia. Por fin, luego de 40 años, se abrirá el camino a una Nueva Constitución nacida en democracia, por un órgano elegido por la ciudadanía que cumpla con dicho fin. Todas las Constituciones de nuestra vida republicana han sido hechas entre cuatro paredes, por Comisiones de expertos.

La Constitución que nos rige hoy se realizó en dictadura, con una Comisión compuesta solo por “hombres”, la cual fue sometida a un plebiscito sin padrones electorales. Este fue el origen ilegítimo que forjó un sistema tramposo, que no permite que las mayorías se representen. Esta misma Constitución

crea quorum supramayoritarios, además del control de las leyes aprobadas por el Congreso actuando con una tercera cámara, que es el Tribunal Constitucional, que ha vetado importantes avances. Estas formas de control es la que asegura que los cambios no hayan podido empujarse.

Sé que para algunos la Constitución se legitimó con la reforma de 2005. Pero dicha reforma si bien sacó enclaves autoritarios, aún mantiene un sistema subsidiario, en que el Estado no garantiza los derechos sociales más básicos. Y esto fue lo que explotó el 18 de octubre, dejar los derechos sociales al libre mercado que discrimina según el bolsillo del usuario, crea desigualdades y abusos.

En abril tendremos un plebiscito en que se decidirá si el pueblo quiere o no una nueva constitución y cuál será el mecanismo: una convención constitucional electa por los ciudadanos, que corresponde a una asamblea constituyente, y otra mixta.

La Asamblea constituyente ha sido una pelea de larga data. Recordemos a Eduardo Frei Montalva, quien en 1980 propuso la idea de levantar una asamblea, frente al fraudulento plebiscito de ese año. En 2013 un grupo de ciudadanos se organizó para marcar AC en las cédulas electorales, en una campaña que pocos creyeron que era posible. Pero la Presidenta Bachelet tomó la posta y echó adelante el proceso constituyente, el cual no tuvo respaldo de la oposición de ese entonces. Ahora nos damos cuenta de quién tenía la razón.

Hoy el pueblo que se manifiesta en las calles ha hablado de la necesidad de una nueva constitución. Y esta reforma es gracias a ellos. El acuerdo político fue gracias a que el pueblo despertó frente a los abusos.

Pero aún tenemos desafíos. Debemos asegurar que la misma sea paritaria. Somos la mitad de la población del país, pero pese a esto, las mujeres hemos estado excluidas en las decisiones políticas, ejemplo del mismo, es que solo el 20% del

Congreso corresponde a Senadoras o Diputadas. A nosotras nos cuesta el doble ganar espacios por el machismo que existe. Por esto es que en la Comisión de Constitución nos unimos las 6 Senadoras de oposición y reiteramos la indicación de la Cámara para asegurar en cada distrito se respete la paridad de género. Gracias al movimiento feminista que ha impulsado esto.

En cuanto a los pueblos originarios, la propuesta es que sean 18 escaños reservados para nuestros pueblos reconocidos como tal: los Aymara, Quechua, Atacameño o Likan Antay, Diaguita, Colla, Rapa Nui, Kawésqar, Yagán y Mapuche. Para esto se creará un padrón especial con un distrito nacional. Llego el momento de reivindicarnos con nuestros pueblos por los 500 años de marginación, en que el nuevo Chile no puede nacer sin ellos. La nueva Constitución debe enriquecerse de la cultura milenaria de ellos. Según el último censo, un 12% de los habitantes de Chile se sienten

parte de un pueblo originario, alcanzando los dos millones de personas.

Si bien el pueblo mapuche ha alcanzado representación parlamentaria, como el ejemplo del Senador Huenchumilla o la Diputada Nuyado, me preocupa que el pueblo rapa nui, que es parte de la circunscripción que represento, no haya tenido cabida en cargos de representación en nuestro país. Pese a que la Isla fue incorporada al territorio chileno, no son parte de las decisiones más importantes, ahondando la distancia geográfica que tienen. Es necesario que tengan una voz en la Convención, para que los problemas de la isla y su visión, sean presentadas en la Nueva Constitución.

Quiero terminar por anunciar mi voto a favor del proceso constituyente. Es un anhelo, ya que muchos habíamos perdido la esperanza de ver caer la Constitución de la dictadura. Gracias al pueblo que se levantó, tendremos una señal de

democracia. Esperamos que ahora salgamos con más fuerza por una Constitución paritaria para un nuevo Chile.

He dicho.

Minuta PL para TIPIFICAR COMO DELITO LA ALTERACIÓN DE LA PAZ PÚBLICA MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE ACTOS DE VIOLENCIA, Y AGRAVA LAS PENAS APLICABLES, EN LAS CIRCUNSTANCIAS QUE INDICA . (Boletines N°s 12.409-03).

I. Antecedentes de Tramitación.

Origen: Moción Miguel Ángel Calisto, Gonzalo Fuenzalida, Gabriel Silber y Matias Walker y la diputada señora Marcela Sabat

Estado: Segundo Trámite Constitucional

Tramitación: Ingreso 25 noviembre 2019

II. Objetivo.

Modificar el Código Penal; con el propósito de tipificar como delito la alteración de la paz pública mediante la ejecución de actos de violencia, agravando las penas aplicables, en determinadas circunstancias.

III. Contenido.

El proyecto introduce un 269 septies, como una nueva modalidad agravada de desórdenes públicos y una figura agravada de robo lugar no habitado, que es la parte relativa a los saqueos.

1. Desordenes agravados.

a. Propuesta aprobada en la Cámara.

i. Conducta y sanción.

La disposición era el Art. 268 septies que comienza por sancionar el que valiéndose de una manifestación o reunión pública tomare parte violenta y activamente en un hecho constitutivo de desorden público será sancionado con reclusión menor en su grado medio a máximo.

La sanción que corresponde es de reclusión menor de grado medio a máximo (541 días a 5 años).

Para entender el tipo, hay que revisar el 269 que establece el delito de desórdenes, sancionando a quienes “*turbaren gravemente la tranquilidad pública para causar injuria u otro mal a alguna persona particular o con cualquier otro fin reprobado*”. Este delito es sancionado de 61 días a 540

Con el nuevo delito que se propone se les aumenta la pena a quienes participen, distinguiendo ahora, entre manifestantes pacíficos (269) y violentos (268 septies).

ii. Desorden público.

El tipo definía diversos desórdenes públicos como la paralización o interrupción de un servicio público, el lanzamiento de objetos contundentes, la destrucción de una vivienda, el incendiar objetos o impedir la libre circulación de personas o vehículos (barricadas); impedir la actuación de Bomberos o cuando se usurparen o tomaren inmuebles de carácter industrial, comercial o agrícola.

En esto agravaba pena para actuar en agrupación alcanzando hasta 5 años. .

b. Propuesta aprobada en Comisión de Seguridad.

Se presentó una nueva propuesta en la Comisión para sancionar que:

- IV. propuesta aprobada por la Comisión considera una nueva redacción para el artículo 268 septies originalmente aprobado en la Cámara. La nueva norma busca sancionar al menos 4 hipótesis de acciones ilegítimas:
- V. a) El que, sin estar autorizado, interrumpa completamente la libre circulación de personas o vehículos en la vía pública *mediante violencia o intimidación en las personas*.

- VI. b) El que, sin estar autorizado, interrumpa completamente la libre circulación de personas o vehículos en la vía pública *mediante la instalación de obstáculos levantados en la misma, con objetos diversos.*
- VII. c) Los que, sin mediar accidente o desperfecto mecánico, interpongan sus vehículos en la vía, en términos tales de hacer imposible la circulación de otros por ésta.
- VIII. d) El que lanzare a personas o vehículos que se encontraren en la vía pública instrumentos, utensilios u objetos cortantes, punzantes o contundentes potencialmente aptos para causar la muerte o producir lesiones corporales.

3. Saqueo.

Se incorpora al artículo 442 (robo lugar no habitado) el siguiente inciso final:

Se aumenta la pena en el robo en lugar no habitado (que se contemplan los saqueos saqueos), a 5 años (hoy va de 540 a 5 años) cuando el autor lo haga actuando en grupo o individualmente, pero amparado en él, y tuvieren lugar con ocasión de calamidad pública o alteración del orden público.

Hoy el actuar en agrupación ya es una agravante para los delitos de robo como lo señalo el artículo 449 bis¹. Mientras que el actuar con calamidad pública es una agravante general, establecida en el artículo 12 numero 10².

IX. Comentarios.

El proyecto yerra al mezclar dos tipos penales: uno dirigido a los saqueadores, el otro destinado a los manifestantes. Lo último no puede ser apoyado, ya que tiene

¹ Será circunstancia agravante de los delitos contemplados en los Párrafos 1, 2, 3, 4 y 4 bis de este Título, y del descrito en el artículo 456 bis A, el hecho de que el imputado haya actuado formando parte de una agrupación u organización de dos o más personas destinada a cometer dichos hechos punibles, siempre que ésta o aquélla no constituyere una asociación ilícita de que trata el Párrafo 10 del Título VI del Libro Segundo.

² 10.º Cometer el delito con ocasión de incendio, naufragio, sedición, tumulto o conmoción popular u otra calamidad o desgracia.

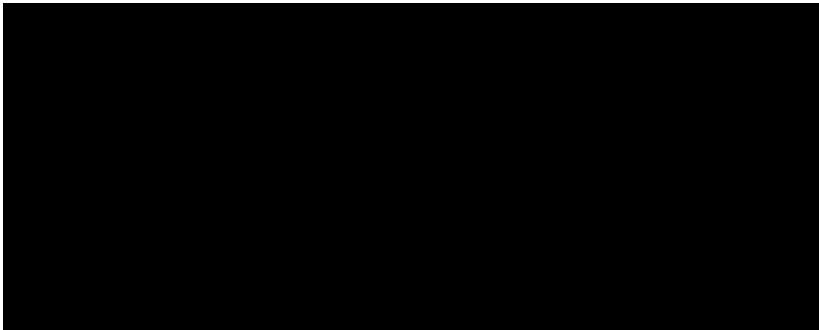
serias deficiencias de técnica legislativa y consider figuras represivas que van en contra de la libertad de expresión y reunión.

De todas, la propuesta penal es innecesaria, hoy existen las herramientas penales en el Código para agravar las penas en estos casos.

En cuanto al delito de desórdenes, si sancionamos por el actual artículo 269 más el delito en particular que se cometa, con una figura de concurso material, aumentarían más las penas de como propone regularlo el proyecto de ley.

Lo mismo con el saqueo, las agravantes que se establecen ya existen, tanto la calamidad como la agrupación.

Se sugiere votar en contra, salvo el ejecutivo divida el proyecto, dejando solo la discusión de la ley antisaqueo en este espacio.



Minuta PL que modifica la LOC de las FFAA, estableciendo el rol de las FFAA en la protección de infraestructura crítica del país cuando sea indispensable para la seguridad de la nación.

I. Antecedentes de Tramitación.

Origen: Mensaje

Estado: Primer Trámite Constitucional

Tramitación: Ingreso 26 noviembre 2019

Quorum: 3/5

I. Objetivo.

Permitir al Presidente de la Republica hacer uso de las FFAA para resguardar infraestructura critica cuando haya un riesgo para la seguridad de la nación.

II. Contenido.

1. Facultad del presidente.

El PL original refirmaba la LOC de FFAA con un nuevo artículo 1° bis, que faculta al Presidente para que en los casos que exista un riesgo para la seguridad de la nación, previo informe del Comité de Inteligencia, pueda ordenar por decreto supremo el empleo de unidades de las FFAA para proteger infraestructura crítica.

2. Infraestructura critica.

Son los servicios de utilidad pública o que se utilizan para el eficaz funcionamiento de la administración del Estado.

3. **Prohíbe suspensión de otros derechos constitucionales.**

4. **Mecanismos de control.**

El Presidente deberá informar al Congreso de las medidas adoptadas para la protección de infraestructura crítica, para lo cual el MINDEF coordinará el actuar de las FFAA y las evaluará.

5. **Duración.**

30 días máximo, renovable por una vez, es decir, puede utilizarse hasta 60 días.

6. **Exención de responsabilidad penal.**

A los militares se les aplica las reglas generales relativa a las causales de justificación para eximirse de responsabilidad penal: Legítima defensa o el cumplimiento de. Pero para establecer si nos encontramos en estos casos frente a una de estas causales, la ley se remitía al protocolo de uso de fuerza.

III. REFORMA CONSTITUCIONAL.

Frente a las críticas de inconstitucionalidad, se decidió tramitar tres mociones presentadas el 25 de noviembre, que son reformas constitucionales, y presentará indicaciones.

a. Boletín 13086.

Autores: Senadora Aravena y Pugh.

Permite el empleo de fuerzas militares para realizar despliegue preventivo en protección de Infraestructura Crítica Nacional, ante la evidencia de un ataque probable sobre ella determinado por el Sistema de Inteligencia Nacional, sin restringir las libertades consagradas en la constitución a la sociedad.

Establece un artículo 42 bis:

- i. Crea el **Estado de Alerta**, en caso que el Sistema de Inteligencia emita alerta de ataque a la infraestructura crítica.
- ii. **Plazo.**
Máximo 15 días, prorrogado por el mismo periodo.
- iii. **Resguardo.** A cargo del jefe de defensa nacional designado por el Presidente, quien dirigirá y supervigilará.
- iv. Se obliga a **informar** ante el Congreso las medidas adoptadas.

b. Boletín 13.085.

Autor: Chahuan.

Requiere 2/3 al modificar el cap. XI de las FFAA.

Crea un nuevo artículo 101 bis que permite que, en caso de grave de conmoción o alteración de orden público, el Presidente pueda disponer el empleo de efectivos de las FFAA, mediante destinación del Ministerio de defensa, para resguardar infraestructura crítica. Tiene un plazo máximo de treinta días.

c. Boletín 13.087

Autor: Aravena, Castro, Prohens y Pugh

Faculta al Presidente para declarar estado de alerta para resguardar infraestructura crítica.

Se faculta al Presidente para que, en caso de grave alteración del orden público o de grave daño a la seguridad, puede declarar estado de alerta para resguardar la infraestructura crítica.

El plazo es de 15 días, prorrogable por igual periodo.

IV. INDICACIÓN SUSTITUTIVA.

El ejecutivo presentó indicación sustitutiva a las tres mociones, la cual explicamos:

Reforma el artículo 32 de la Constitución que regula las atribuciones exclusivas del Presidente de la república. En su numeral 17, se establece que tendrá como atribución la de “Disponer de las fuerzas de aire, mar y tierra, organizarlas y distribuirlas de acuerdo con las necesidades de la seguridad nacional;”

La propuesta agrega los siguientes párrafos:

1. Facultad para que FFAA resguarden infraestructura critica:

Establece que excepcionalmente, el Presidente de la República podrá decretar, cuando se ponga en peligro la infraestructura crítica del país a consecuencia de una **grave alteración del orden público o de atentados a ella**, que las FFAA se hagan cargo de ésta.

2. Decreto.

El decreto debe ser debidamente fundado, siendo suscrito, además, por los Ministros del Interior y Seguridad Pública y de Defensa Nacional, teniendo una **duración máxima de 30 días corridos**. Para sucesivas prórrogas se requerirá del acuerdo del Congreso Nacional.

3. Infraestructura critica.

Comprende:

a) empresas o servicios, cualquiera que sea su naturaleza, finalidad o función, que atiendan servicios de utilidad pública cuya perturbación en su funcionamiento o su destrucción tendría un grave impacto sobre la población y

b) el Gobierno, Congreso Nacional, el Poder Judicial y los órganos de la Administración del Estado

Una ley los determinará cuales son. Transitoriamente, serán denominados por un decreto.

4. Prohibición restricción de otros derechos y utilizar FFAA para otros fines.

En ningún caso el ejercicio de esta facultad podrá implicar la suspensión, restricción o privación de los derechos y garantías constitucionales o disponer el empleo de las Fuerzas Armadas para reestablecer el orden o la seguridad pública o afectar las facultades correspondientes a las Fuerzas de Orden y Seguridad. El Presidente de la República deberá informar a la brevedad al Congreso Nacional de las medidas adoptadas en virtud de esta atribución

V. Análisis Crítico.

1. El proyecto es innecesario.

El Presidente cuenta hoy con el Estado de Emergencia para utilizar a las FFAA para el resguardo de infraestructura. Este Estado de excepción le permite utilizar a las FFAA por 15 días, prorrogable por otros 15. Si bien, con éste puede restringir la libertad de locomoción (toque de queda) y reunión. Pero no es necesario.

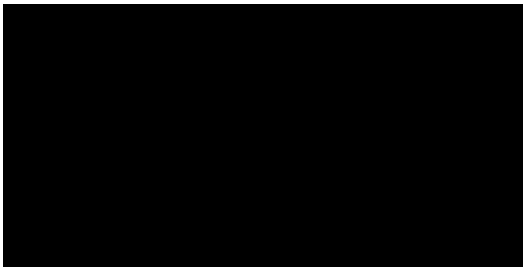
2. Deja una facultad arbitraria al Presidente.

Si bien el decreto debe ser fundada, su causal es genérica y amplia, como lo es una grave alteración al orden público o un atentado a ella, causal también que es recogida hoy para que proceda el Estado de Emergencia en 42. No existe una definición clara para acotar cuando la alteración será grave, lo cual le permite tener un amplio margen de acción para su utilización.

3. Modifica atribuciones de las FFAA.

Constitución regula en su artículo 101 que las FFAA que existen para la defensa de la patria, siendo esenciales para la **seguridad nacional**. La seguridad nacional se entiende “producto del conjunto de actividades que el Estado realiza para avanzar hacia el logro de sus objetivos y resguardar los intereses nacionales en relación con riesgos, amenazas e interferencias importantes”¹.

Por esto las FFAA no tienen atribuciones relativas al control de orden público, por lo que, para utilizar a estas fuerzas para estos fines, debe modificarse el artículo 101.



¹ <https://www.anepe.cl/fuerzas-armadas-esenciales-para-la-seguridad-nacional/>

Nueva Constitución.

I. Reforma Constitucional.

Una Comisión Técnica paritaria propuso la reforma constitucional que se presentó en la Cámara sobre diversas mociones, la cual reformará el capítulo XV (2/3), denominándolo ahora “Capítulo XV. Reforma de la Constitución y del Procedimiento para Elaborar una Nueva Constitución de la República.”

1. Plebiscito de entrada (art. 130).

El Presidente convocará a un plebiscito para el 26 de abril con dos cédulas distintas con estas preguntas:

a. “¿Quiere usted una nueva Constitución?”

Apruebo o Rechazo.

b. Mecanismo de Cambio Constitucional:

i. Convención Mixta Constitucional: 50% ciudadanos, 50% parlamentarios.

ii. Convención Constitucional: 100% ciudadanos.

Los Canales de televisión deberán destinar 30 minutos diarios a propaganda electoral sobre el plebiscito.

2. Elección Convención.

Si se aprobaré elaborar una NC, el Presidente deberá convocar a elección de los miembros de la Convención elegida juntos las elecciones regionales y municipales de octubre de 2020, siendo los integrantes electos llamados Convencionales Constituyentes.

Los delegados se elegirán con el mismo sistema electoral que rige la elección de las elecciones de diputados (proporcional corregido y mismo distritaje).

3. Requisitos e incompatibilidades de los candidatos.

Podrán ser candidatos los ciudadanos que tengan derecho a sufragio, no aplicándose ningún otro requisito o inhabilidad.

Cesarán en sus cargos al momento de inscripción de candidaturas: los Ministros de Estado, los intendentes, los gobernadores, los alcaldes, los consejeros regionales, los concejales, los subsecretarios, los secretarios regionales ministeriales, los jefes de servicio, los miembros del Consejo del Banco Central, los miembros del Consejo del Servicio Electoral, los miembros y funcionarios de los diferentes escalafones del Poder Judicial, del Ministerio Público, de la Contraloría General de la República, así como, los del Tribunal Constitucional, del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, del Tribunal de Contratación Pública, del Tribunal Calificador de Elecciones y de los tribunales electorales regionales; los consejeros del Consejo para la Transparencia, y los miembros activos de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública.

Los electos contarán con permiso sin goce de remuneraciones si son trabajadores del Estado.

Los integrantes tendrán una dieta mensual de 50 UTM.

4. Formas de tomar acuerdos.

En la primera sesión de instalación, la Convención elegirá Presidente y Vicepresidente por mayoría absoluta.

Convención deberá aprobar las normas de la Constitución y su reglamento de votación por el quorum de dos tercios, no pudiendo alterar estos.

- i. En las experiencias internacionales de AC se han exigido altos quorum para adoptar acuerdos: unanimidad, consenso o dos tercios. Excepto, Ecuador (2007) y Portugal (76), que permitía mayoría absoluta.
- ii. Asegura que solo las materias que tengan un alto consenso queden en la CPOL, mientras que el resto puede ser remitida a ley ordinaria.
- iii. La Nueva CPOL se escribirá desde un texto en blanco, por lo cual, inclusive, puede quedar con un solo artículo, derogando la del 80.

Con esta redacción, el texto final no debe ser ratificado por 2/3 como lo establecía el Senador Allamand.

Funciones.

La convención tendrá por único objeto dictar una nueva Constitución,

Se señala en el art. 135 que mientras la Convención esté en funciones la soberanía reside en la Nación, quedándole prohibido a cualquiera de sus integrantes o a una fracción de ellos, atribuirse el ejercicio de la soberanía, asumiendo otras atribuciones que las que expresamente le reconoce esta Constitución.

El texto de Nueva Constitución que se someta a plebiscito deberá respetar el carácter de República del Estado de Chile, su régimen democrático, las sentencias judiciales firmes y ejecutoriadas y los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, importante destacar que se deberán respetar los estándares mínimos de los tratados de DDHH ratificados por Chile.

5. Reclamaciones (art. 136)

Se podrá reclamar de la infracción de las normas de procedimiento las que deberán ser suscrita por un cuarto de los miembros de la Convención, siendo

interpuesto ante la Corte Supremo dentro de 5 días desde el vicio alegado, las que conocerán cinco ministros de la Corte Suprema.

6. Plazo funcionamiento (art. 137)

Tiene un plazo de funcionamiento de 9 meses, prorrogable por única vez por 3 meses. La prórroga será solicitada por quien ejerza la Presidencia o por un tercio de sus miembros. Vencido el plazo se vencerá de pleno derecho.

La nueva Constitución no podrá poner término anticipado al periodo de las autoridades electas.

7. Integración Convención Mixta.

Estará integrada por 172 miembros (86 parlamentarios y 86 electos). Los Convencionales no parlamentarios son elegidos en distritos y proporcionalmente.

8. Convención Constitucional.

Está integrada por 155 ciudadanos electos, en base a los distritos de la elección de diputados. Sus integrantes no podrán ser candidatos a cargos de elección popular mientras ejercen sus funciones y hasta un año después.

9. Plebiscito ratificadorio.

El texto que surja de la Convención se someterá a un plebiscito con voto obligatorio. El mismo no podrá realizarse 60 días antes ni después de una votación popular. Por esto, podrá ser llevado a cabo en septiembre de 2021 o en marzo de 2022.

El ciudadano que no sufragare será penado con multa de 0,5 a 3 UTM, salvo que se haya justificado.

La pregunta del plebiscito será: “¿Aprueba usted el texto de Nueva Constitución propuesto por la Convención Mixta Constitucional?” o “¿Aprueba usted el texto de Nueva Constitución propuesto por la Convención Constitucional?”.

En caso de ser aprobada, el Presidente convocará al Congreso Pleno para que se jute o prometa acatar la Nueva Constitución.

Si fuese rechazado el plebiscito, continuará vigente la presente Constitución.

10. Vigencia Nueva Constitución.

Comenzará a regir una vez promulgada luego del plebiscito, derogándose en ese momento la Constitución actual.

II. COMPOSICION.

Fuera del acuerdo se han propuesto los siguientes temas, en que se presentaron indicaciones en la Cámara que se describen a continuación:

a. Paridad de género.

La propuesta de la Cámara es que, en la declaración de candidaturas, deberá ser paritaria. En la cédula de votación, las listas serán encabezadas por mujeres, luego alternando por sexo. En caso de no cumplirse, se rechazarán todas las candidaturas.

En la elección, los escaños deberán ser asignados a las candidaturas más votadas dentro de la lista. En caso que elija la lista más de un escaño, éste deberá ser asignado a la candidatura más votada que corresponde al sexo que falte para asegurar paridad. El mecanismo se aplicará a las listas menos votadas y así sucesivamente.

b. Integración de independientes.

Se ha propuesto que puedan conformarse lista de independientes dos o más candidatos independientes, que solo registrará exclusivamente en el distrito electoral en que los candidatos independientes declaren sus candidaturas. Los pactos solo serán hasta un máximo de candidaturas equivalentes al número inmediatamente superior al número de convencionales. Deberán tener un lema y un programa común. Cada candidato/a deberá tener el patrocinio de un 0,4% de los que hubieren sufragado con el distrito en la última elección de diputados.

c. Escaños reservados Pueblos Indígenas.

Otorgarán 18 escaños en la Convención Constituyente para los pueblos indígenas Aymara, Quechua, Atacameño o Likán Antay, Diaguita, Colla, Rapa Nui, Kawésqar, Yagán y Mapuche, mientras que la mixta serán 21 escaños. Los candidatos deberán contar con la certificación de calidad indígena de la CONADI.

Las candidaturas deberán ser individuales o contar con el patrocinio de una comunidad indígena.

Para esto existirá un distrito electoral en el territorio nacional, en que habrá un padrón especial con base al registro de comunidades.

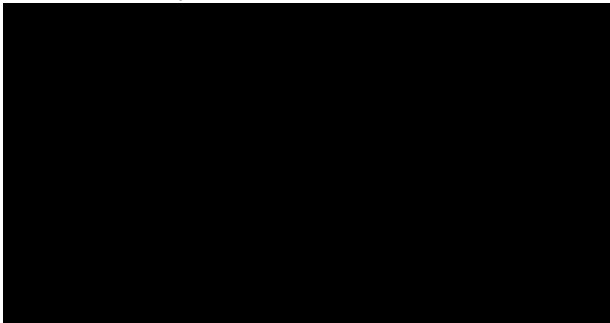
Para la Convención Constituyente, serán proclamados electos las dos primeras mayorías del pueblo Aymara, la primera mayoría del pueblo Atacameño o Likán Antay, la primera mayoría del pueblo Colla, la primera mayoría del pueblo Diaguita, las nueve primeras mayorías del pueblo Mapuche, la primera mayoría del pueblo Quechua, la primera mayoría del pueblo Rapa Nui, la primera mayoría del pueblo Kawésqar y la primera mayoría del pueblo Yagán.

d. Participación Ciudadana.

Se deberá contemplar mecanismos de participación ciudadana para todo el período de funcionamiento de la Convención Mixta Constitucional o Convención Constitucional, tales como consultas, cabildos, audiencias públicas y otras formas de diálogos ciudadanos constitucionales.

e. Delegados en el exterior.

Esto no se presentó en la Cámara, pero en la actual ley los chilenos en el exterior solo pueden votar en plebiscitos nacionales y elecciones presidenciales. Pero para asegurar su representación, se pueden postular delegados electos en el exterior. En Ecuador se permitió 6 delegados del exterior en su asamblea constituyente.



Minuta que Otorga reajuste de remuneraciones a los trabajadores del Sector Público, concede aguinaldos que señala, concede otros beneficios que indica, y modifica diversos cuerpos legales. (Boletín N° 13.114).

I. Antecedentes de Tramitación.

Origen: Mensaje

Estado: Segundo Trámite Constitucional

Tramitación: Ingreso 11 Diciembre 2019

II. Contenido.

1. Reajuste diferenciado.

Propone un reajuste desde el 1° de diciembre.

La primera propuesta del proyecto fue de un 0,7% para los funcionarios cuyas remuneraciones brutas sean superiores a \$2.000.000.- (\$1.640.000.- líquidos). Mientras que para los sueldos inferiores a \$2.000.000.-, el reajuste era de 2,8%.

Luego de ser rechazado en la Cámara y la insistencia, a través del Senado, el ejecutivo propuso una nueva segmentación en \$3.000.000.- brutos. En la primera propuesta del gobierno, mantiene los guarismos del mensaje original (2,8% y 0,7%). Pero la propuesta final fue de 1,4% nominal para los que tuvieran ingresos mayores.

El reajuste se aplica a las remuneraciones, asignaciones, beneficios u demás retribuciones en dinero, imponibles para salud y pensiones o no imponibles.

Para los funcionarios de atención primaria se señalan categorías funcionarios para este reajuste.

Los trabajadores del sector público que no están afectos a los sistemas remuneraciones indicados, que tengan una remuneración bruta menor a 2 millones, también accederán al reajuste de 2,8%, no aplicado a las asignaciones.

Se excluye del reajuste al Presidente, Ministros, Subsecretarios, Intendentes, ministros Corte Suprema y Contralor. Lo cual repercute en las dietas de parlamentarios.

2. Otros beneficios.

Se incluyen beneficios para los trabajados, lo cual está segmentado. Primer tramo, incluye remuneraciones liquidas iguales o inferiores a \$773.271, y el segundo tramo, rentas brutas iguales o inferiores a \$2,5 millones.

- a. **Bono Navidad.** Sera de \$57.873.- para primer tramo y \$30.613 para el segundo.
- b. **Bono de fiestas patrias** de \$74.516 y \$51.727 rrspectivamente.
- c. **Bono escolaridad.** \$72.468.-
- d. **Vacaciones**, que será pagado en enero, será de \$122.332 para primer tramo y \$85.234 para el segundo.
- e. **Bienestar.** Habrá un aporte de \$126.241.

El bono de termino de conflicto quedó fuera, por no haber consenso entre todos los gremios.

III. Rechazo Cámara.

Fue rechazado en la Cámara por 65 votos contra 72, por lo cual el ejecutivo hizo uso de su facultad del articulo 72, es decir, la insitencia en el Senado, el cual debe ser aprobado por los dos tercios, para volver a la Cámara.

Los argumentos para rechazar son debido a que no estaban de acuerdo con la segmentación en 2 millones de pesos. Además, el reajuste es menor al IPC

proyectado por el BC en informe de política monetaria de diciembre, que alcanza los 3,9%, por lo cual los funcionarios terminarían perdiendo poder adquisitivo. El guarismo propuesto por el ejecutivo, proviene de la proyección de Hacienda de octubre.

Otro punto relevante, es que el artículo 72 modifica la ley de contraloría, para alterar el orden de subrogación del Contralor, para que no sea la subcontralora.

En la Cámara cayó el artículo 46, que permitía el teletrabajo en el sector público.

